

DOCUMENTO DE TRABAJO N°6
“ESTADO , POLÍTICAS PÚBLICAS Y FEDERALISMO”

IV CONGRESO DE ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

OTRO RUMBO ES POSIBLE: AGENDA DE DESAFÍOS PARA LO QUE VIENE

I JORNADA FEDERAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

**DANIEL GARCÍA DELGADO
CLAUDIA BERNAZZA
(COMPILADORES)**



FLACSO
ARGENTINA

Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales.
Sede Argentina.

Área Estado y
Políticas Públicas.

PANEL: ESCENARIOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFORMACIÓN EN
LA ARGENTINA: AVANCES, DILEMAS Y PROYECCIONES. COORDINÓ:
MARÍA CECILIA CORDA

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: RECORRIDOS Y PERSPECTIVAS PARA LAS BIBLIOTECAS

Por **María Celeste A. Medina**

Aunque tal vez muchas/os de los aquí presentes sepan de qué hablamos cuando hablamos de acceso a la información pública, me parece importante que repasemos algunos conceptos esenciales que subyacen a este derecho fundamental, lo que nos permitirá luego hacer ciertos recorridos sobre su legislación en el mundo y, especialmente, en la Argentina. A continuación, analizaremos qué perspectivas tienen las bibliotecas en el ámbito de este tipo de información y en especial cómo pueden garantizar su acceso.

En primer lugar, no podemos escindir la información pública de un sistema de gobierno republicano. Nacen juntos de la mano de la democracia moderna, producto de la Ilustración.

Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la información pública es aquella

que está bajo custodia, administración o tenencia del Estado; la información que el Estado produce o que está obligado a producir; la información que está bajo poder de quienes administran los servicios y los fondos públicos, únicamente respecto de dichos servicios o fondos; y la información que el Estado capta, y la que está obligado a recolectar en cumplimiento de sus funciones. (CIDH-OEA, 2010, p. 6)

Por lo tanto, la información pública es aquella que produce o recoge tanto el Estado como quienes reciben fondos públicos, siempre en relación al uso que se hace de esos fondos. Esta definición, aunque simple, nos permite imaginar el vasto caudal de información a la que hacemos referencia y el lugar que ocupa el poder de la guarda de dicha información, lo que nos

invita a reflexionar en las implicancias del derecho de acceso a este tipo de información.

Para analizar este punto, recurriremos a la definición que el jurista italiano Luigi Ferrajoli brinda sobre los derechos fundamentales, entre los cuales se enmarca el derecho de acceso a la información pública. Para él se trata de

todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a «todos» los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por «derecho subjetivo» cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por «status» la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas (Ferrajoli, 2005, p. 19).

A su vez, los derechos fundamentales tienen como características ser:

- Universales: se reconocen a todos sus titulares “en igual forma y medida” [...] y “son inclusivos” (Ferrajoli, 2005, p. 30). Las limitaciones de los sujetos a los que corresponden estos derechos es ser persona, ciudadano o capaz de obrar.
- Inalienables: no se pueden ceder
- Indisponibles: no se puede disponer de los intereses o beneficios sustanciales en que los mismos consisten
- Inviolables.
- Intransigibles.
- Personalísimos.

Asimismo, la importancia de tales derechos radica en que son considerados “constitutivos de la igualdad y del valor del individuo” [...], “cuya garantía es igualmente necesaria para satisfacer el valor de las personas y para realizar su igualdad” (Ferrajoli, 1997, pp. 908 - 909).

Otra de las características que hace singular al derecho de acceso a la información es su valor instrumental, como herramienta para el acceso y la garantía de otros derechos civiles, políticos, sociales, jurídicos y económicos.

Ahora bien, anteriormente dijimos que el derecho de acceso a la información pública nace con las democracias modernas. Sin embargo, lo que no se produce al mismo tiempo es la legislación que lo garantiza. Salvo Suecia, que fue pionera en producir una ley al respecto en el año 1766, la *Ley de Prensa y Expresión y del Derecho a Acceso a las Actas Públicas*, en Europa la legislación al respecto se produce recién entre las décadas de 1970 y 1990.

En América Latina, en cambio, la mayor parte de los países promulga leyes entre las décadas de 1990 y hasta inicios del siglo vigente.

En Argentina, concretamente la normativa que garantiza el derecho se produce en el año 2003 a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, el 1172.

Como bien sabrán ustedes, los decretos tienen sus limitaciones: en primer lugar porque cuando no corresponden a su calidad de necesidad y urgencia, sus validaciones en el marco de una democracia son complejas: su posible derogación en un cambio de gobierno, el cuestionamiento de un poder ejecutivo que se tome atribuciones legislativas que no le corresponden, etc.

No es casual que los organismos internacionales, tales como la UNESCO, a través del trabajo de Fuenmayor Espina (2004), por ejemplo y la OEA (2010) sugieran que se presenten proyectos de leyes al respecto que pasen por el circuito correspondiente, es decir por las cámaras del Congreso.

En segundo lugar, un decreto de esta naturaleza solamente alcanzaba a la información pública generada o bajo guarda del Poder Ejecutivo Nacional, de quien emanaba el decreto, o de organismos que recibían fondos públicos, pero también desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Para poder acceder a la información generada o en guarda de los otros dos poderes (Legislativo y Judicial) no existía entonces ningún decreto ni ley que explicitara este derecho. Aunque es cierto que la constitución nacional argentina y los tratados internacionales a los que adhiere desde el año 1994, tales como el Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Pérez, 2016) brindan herramientas implícitas y explícitas que propician un contexto de accesibilidad a la información pública, entendemos que el camino es mucho más sinuoso cuando no existe una ley que explicita el derecho y la dinámica para ejercerlo, así como el decreto de regulación que acompaña cada ley, que especifica aun más los pasos a seguir, quiénes son los organismos responsables de cumplirla, el organismo que debe velar por el cumplimiento de dicha ley, cuál es el alcance y las limitaciones del derecho, las obligaciones del Estado y de las/os ciudadanas/os, etc.

El decreto 1172, por otro lado, incluía varios reglamentos¹. Recién el anexo VII estaba destinado al acceso a la información pública y consistía en un reglamento de carácter general.

Por lo tanto, la promulgación de la ley 27.275 del año 2016 significó un avance porque además de incluir el derecho de acceso a la información

1 Reglamentos Generales de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional, para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, para la

pública de los tres poderes del Estado más los organismos descentralizados², permite que el pedido de información se realice por medios electrónicos; por otra parte determina la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico que debe funcionar con autonomía funcional, aunque en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional (Art. 24).

Dicha agencia es la encargada, entre otras cosas, del diseño de la plataforma tecnológica para la gestión de las solicitudes de información y sus correspondientes respuestas. Centraliza las solicitudes y las respuestas, lo que pretende quitarle a la / al ciudadana/o es el trabajo de tener que dirigirse a cada ente y de ser derivado burocráticamente hasta el cansancio. Dicha agencia también se encarga de asesorar a las personas que lo requieran.

De todas maneras la ley, en su artículo 28 también indica que los tres poderes más los organismos descentralizados deben disponer de un “organismo con autonomía funcional y con competencias y funciones idénticas a las de la Agencia de Acceso a la Información Pública” [...] “que actuará en el ámbito del organismo en el que se crea”.

Por el momento, lo que podemos observar ingresando a los sitios Web de organismos públicos estatales nacionales, pertenecientes a los tres poderes y también aquellos descentralizados, es que el cumplimiento del art. 28 es disímil. Para ser más exactxs, el problema central está en el Poder Judicial de la Nación, dado que el Poder Ejecutivo Nacional cumple en el 100% de las páginas Web de sus ministerios con el requerimiento de un micrositio destinado al Acceso a la Información Pública, asesorando y permitiendo que se realicen solicitudes de manera digital a través de un formulario.

Es cierto que en algunos de estos casos, el micrositio destinado a este fin está más visible que en otros. Pero esta observación bien puede ser tema de otro análisis.

También disponen de micrositos para el acceso a la información pública los organismos descentralizados mencionados por la Ley 27275 y el Poder Legislativo Nacional en ambas cámaras: diputados y senadores.

El problema se plantea con el Poder Judicial de la Nación ya que el sitio Web de la Corte Suprema de Justicia presenta links para acceder a gobierno abierto, un espacio de datos abiertos con informes de administra-

Elaboración Participativa de Normas, del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional y de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos, Formularios de inscripciones, registro y presentación de opiniones y propuestas. Establécese el acceso libre y gratuito vía Internet a la edición diaria del Boletín Oficial de la República Argentina.

2 Los organismos descentralizados a los que hace referencia la Ley son: el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura y el Banco Central (Art. 7).

ción, sentencias, presupuestos, etc., sumado a otro micrositio denominado *Participación ciudadana* en el que ofrece una serie de enlaces, tales como: Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, Biblioteca, Biblioteca digital, Centro de Información Judicial, Comisión Nacional de Acceso a Justicia, Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, Cuerpo Médico Forense, Dirección General de Archivos, Dirección General de Bibliotecas, Dirección General de Mandamientos, Mapa de Acceso a Justicia, Medicina Preventiva Laboral, Obra Social del Poder Judicial, Oficina de la Mujer, Oficina de Referencia Extranjera, Oficina de Violencia Doméstica, Peritos Anticorrupción, Plan Nacional de Capacitación Judicial, Secretaría de Auditores Judiciales, Secretaría de Jurisprudencia, Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Justicia Federal y Nacional.

Sin embargo, no visualizamos un espacio destinado al acceso a la información pública y no queda claro dónde ni cómo realizar solicitudes.

Tal como bien señalaron Natalia Volosin y Renzo Lavín (2019) en su artículo periodístico *El acceso a la información pública no debe ser restringido*, la Corte Suprema de la Nación expuso, a través de la acordada 42 de diciembre de 2017, su decisión de no crear el órgano de aplicación que la ley requiere, designando a la Dirección de Relaciones Institucionales como responsable del acceso, poniendo en cabeza del presidente de la Corte (no de un órgano autónomo) la función de resolver los reclamos por incumplimiento' (párr. 9). Y, como ya mencionamos, al no disponer de un espacio para realizar el pedido de manera digital, obliga a que las/os ciudadanas/os tengan que hacerlo por escrito, burocratizando el procedimiento y limitando claramente las incumbencias de la ley.

En este contexto, ¿qué perspectivas se presentan para las bibliotecas argentinas en relación al acceso a la información?

La ley de acceso a la información pública era una deuda pendiente en la Argentina. Su promulgación significó un avance importante, pero este hecho no puede lograr en sí mismo que el derecho de acceder a información pública se concrete en cada una/o de nosotras/os. El ejercicio del mismo es voluntario. Por tanto, para ejercerlo, primero debemos saber que existe como tal, conocer sus implicancias, posibilidades y limitaciones.

Que la Argentina cuente con una ley que garantice este derecho también permite a las bibliotecas enmarcarse en una agenda global. En este sentido, el trabajo *Las Bibliotecas frente a los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)* de Fernando Díaz Pacífico, Silvia Ferreira y Paulina Freán (2019), presentado el pasado junio en Rosario, analiza la adopción del compromiso de la ONU del año 2015 denominado "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible" en el que se presenta una agenda organizada en un conjunto de 17 objetivos, 169 metas y 232

indicadores que pretenden orientar la adopción de políticas y acciones de los gobiernos de los Estados miembros a fin de lograr un mundo más equitativo, seguro y sostenible para el año 2030.

En consonancia con este compromiso, la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas) está liderando un movimiento global para implicar al sector bibliotecario en esta agenda (Díaz Pacífico, Ferreira y Freán, 2019, p.1).

Si bien la presentación de este trabajo demostró que las bibliotecas pueden tener un rol protagónico en prácticamente todos los objetivos, para el tema que estamos abordando aquí nos interesa especialmente el objetivo número 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas” Este objetivo considera que “el acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles de la comunidad son condiciones indispensables para la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible”. (Argentina. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2019, párr. 25)

Este gran objetivo se desglosa en 10 objetivos específicos, de los cuales resaltamos:

16.5) Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

16.6) Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

16.7) Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.

16.8) Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las instituciones de gobernanza mundial.

16.10) Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

(Argentina. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2019, párr. 30-35).

¿Cómo podrían entonces las bibliotecas adquirir o reforzar un rol protagónico hacia la ciudadanía para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 16 vinculado al derecho de acceso a la información pública?

En primer lugar, toda Biblioteca, como parte de sus servicios, colabora, asesora, orienta en las búsquedas de información, especialmente en fuentes que respondan a ciertos criterios de calidad.

Los sistemas de información pública de los tres poderes del Estado, en nuestro país, están regulados por la Ley 27275. Como hemos mencionado anteriormente, el cumplimiento de algunos aspectos de la ley es dispar.

Sin embargo se perciben mejoras en la difusión de este tipo de información en los tres poderes, al menos al nivel nacional, que es el que hemos analizado para esta presentación. Los organismos gubernamentales se constituyen en la primera fuente de información pública a la que tenemos que dirigirnos cuando así lo requiramos, así como difundir entre las y los usuarios no solo estos sistemas de información actuales y la dinámica para realizar solicitudes, sino la letra completa de la Ley 27275 y su espíritu.

Para que eso suceda, las bibliotecarias y los bibliotecarios debemos conocer la ley y apropiárnosla, para luego idear planes de difusión.

El derecho de acceso a la información pública debería ser, por ende, contenido de nuestros programas de formación y la dinámica para acceder a dicha información en nuestro país, debiera trabajarse dentro de las competencias informacionales en los programas de alfabetización informacional (AlFin) de nuestras bibliotecas.

Para ello es importante repasar los conceptos formación de usuarios y AlFin.

Según Irma Luz García y Mercedes Portugal (2008, pp. 161-162), la formación de usuarios “involucra un proceso integral, que permite que los usuarios usen de manera eficaz los recursos y servicios de las bibliotecas y en un plano más amplio desarrollen competencias y habilidades para buscar, recuperar, seleccionar, evaluar, utilizar y producir nueva información o conocimiento”.

Desde esta perspectiva podemos considerar que las bibliotecas que generan información pública o que estén insertas en instituciones que lo hagan, deberán estar especialmente interesadas en formar a su comunidad en el uso de este tipo de información.

En cuanto a la AlFin, según CILIP³ (2018, p. 3) es “la capacidad de pensar críticamente y hacer juicios equilibrados sobre cualquier información que encontremos y usemos. Nos empodera como ciudadanos para alcanzar y expresar opiniones informadas y para comprometernos plenamente con la sociedad”.

Del desarrollo que CILIP hace de esta definición podemos concluir que la AlFin promueve el pensamiento crítico y facilita una mejor comprensión de los elementos éticos y políticos que subyacen a la generación, uso y difusión de la información. Así, podemos afirmar que es una herramienta que bien puede contribuir a generar democracias más inclusivas, propiciando la participación ciudadana.

3 Chartered Institute of Library and Information Professionals es un instituto colegiado de bibliotecarixs y profesionales de la información del Reino Unido.

La Argentina dispone de un abanico de bibliotecas de gestión estatal muy amplio: bibliotecas públicas, populares que reciben subsidios estatales, escolares de escuelas públicas o bien de escuelas privadas subsidiadas, universitarias públicas, de institutos de nivel superior públicos, gubernamentales, nacional, provinciales, municipales, especializadas dependientes de organismos públicos o bien que reciben fondos públicos, especiales de organismos públicos, tales como bibliotecas hospitalarias para pacientes y familiares, bibliotecas en entornos carcelarios, entre otras posibilidades.

Las bibliotecarias y los bibliotecarios que se desempeñan en unidades de información que pertenecen a organizaciones que generan información pública deben:

1. Conocer el alcance de la ley nacional de acceso a la información pública 27.275;
2. Ser las/os primeras/os en concientizar a las funcionarias y funcionarios a cargo de dichas organizaciones para que comprendan a cabalidad la obligación de difundir este tipo de información. Este punto no siempre es fácil de llevar a cabo. Por eso se sugiere:
3. Establecer lazos con otras organizaciones que avalen y promuevan este derecho, en especial con organizaciones de renombre y trayectoria. Se sugiere promover el trabajo cooperativo con otras bibliotecas, con asociaciones bibliotecarias que incorporen en su agenda de trabajo esta temática, con clínicas jurídicas, universidades, órganos de control y audición de los actos de gobierno, etc.

Entre algunos de las organizaciones relevadas para el presente trabajo con las cuales contactarse, mencionamos:

Del ámbito nacional

- Agencia de Acceso a la Información Pública
- Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ).
- Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información (OGDAI) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Clínicas de Acceso a la Información Pública, tales como las que funcionan en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata o la Clínica Jurídica de Interés Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

Del ámbito internacional

- Organización de Estados Americanos. Departamento de Derecho Internacional
 - Unesco. Oficina regional de Ciencia para América Latina y el Caribe.
4. propiciar, a través de una adecuada gestión de la información, que el acceso a la misma sea fácil y por los medios que indica la ley;

5. asesorar en la creación y diseño de sistemas de información de información pública propios, cuando corresponda;
6. idear, redactar y ejecutar programas tanto de formación de usuarias/os como de AlFin que contemplen el acceso a la información pública como parte de sus contenidos. Este último punto puede aplicarse en cualquier tipo de biblioteca.

En base a lo planteado, ¿qué horizontes se abren y qué dilemas se plantean para nuestra profesión?

Las bibliotecarias y los bibliotecarios siempre hemos tenido entre nuestros objetivos centrales promover y garantizar el libre acceso a la información.

La información pública, por su carácter de pilar de la democracia, alcanza un valor instrumental para el desarrollo de los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos.

En la Argentina, la ley de acceso a la información pública n° 27275 fue promulgada en el año 2016, por tanto es una ley reciente que requiere de difusión y promoción para su uso. Las bibliotecas deben convertirse en difusoras y promotoras del ejercicio de este derecho e incorporar como fuente de información al Estado y a las instituciones que reciban fondos del mismo. Es decir, los servicios de información y referencia bibliotecarios deben promover y hacer uso cotidiano de los sistemas de información pública.

En las bibliotecas de gestión estatal o que recibieran algún subsidio público, las bibliotecarias y los bibliotecarios deben tener una actitud proactiva en la sensibilización destinada a las personas con capacidad para la toma de decisiones en la organización, lo que permitirá organizar y gestionar la propia información pública que genere la biblioteca o el organismo del cual dependa, crear o asesorar en el diseño y creación de sistemas de información para que el acceso a la misma sea simple y claro.

En esta práctica cotidiana será imprescindible que las y los profesionales de la información tengamos un compromiso permanente con el derecho de acceso a la información pública. Para esto será necesario generar y/o profundizar alianzas con otras/os colegas, redes y organizaciones afines para constituirnos como actrices y actores esenciales del entramado de políticas públicas de información. Por tanto, estamos convocadas/os no solo a garantizar este derecho desde organizaciones en las que se genere información pública o bien se requiera, sino a generar más y mejores políticas vinculadas al libre acceso a la información en términos amplios.

Referencias bibliográficas

- Argentina. (2003, 3 de diciembre). Decreto 1.172. Acceso a la información pública. Boletín Oficial 30.291, diciembre 4, 2003. Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=90763>.
- Argentina. Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. (2019). Los 17 objetivos. Recuperado de <http://www.odsargentina.gob.ar/Los17objetivos>
- Argentina. (2016, 14 de septiembre). Ley 27.275. Derecho de acceso a la Información pública. Boletín Oficial 33.472, Septiembre 29, 2016. Recuperado de <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/265949/texact.htm>
- CIDH-OEA. (2010). El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 30 de diciembre de 2009, párr. 21. Recuperado de <http://www.cidh.org/pdf%20files/RELEacceso.pdf>.
- CILIP (2018). Definition of information literacy. London: CILIP. Recuperado de <https://infolit.org.uk/ILdefinitionCILIP2018.pdf>
- Convención Americana de Derechos Humanos. (1969). Pacto de San José de Costa Rica. Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
- Ferrajoli, L. (1997). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta.
- Ferrajoli, L. (2005). Derechos fundamentales. Los fundamentos de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta.
- Fuenmayor Espina, J. (2004). El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. Análisis Jurídico y recomendaciones para una propuesta de ley modelo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública. San José de Costa Rica: UNESCO. Recuperado de http://portal.unesco.org/es/file_download.php/561ff4bc2719856c5184270296fc48f5EL+DERECHO+DE+ACCESO+DE+LOS+CIUDADANOS+A+LA+INFORMACION+PUBLICA.pdf
- García, I. L. y Portugal, M. (2008). Servicio de referencia. Una propuesta integradora. Buenos Aires: Alfagrama.
- Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
- Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado de <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>
- Organización de Estados Americanos. (2010). Ley modelo interamericana sobre acceso a la información pública. Recuperado de http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2607_XL-O-10.pdf
- Pérez, A. (2016). Ley de acceso a la información pública. Comentada. Buenos Aires: Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Recuperado de <https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-27275-comentada.pdf>.

Volosin, N. y Lavín, R. (9 de agosto de 2019) El acceso a la información pública no debe ser restringido. *Infobae*. Recuperado de <https://www.infobae.com/opinion/2017/12/30/el-acceso-a-la-informacion-publica-no-debe-ser-restringido/>